



Poder Legislativo de Querétaro



OP61

10895

06/02/25 14:33

224295-58E102T133AL06

Sistema de Control de Asuntos

Santiago de Querétaro, Qro., a 06 de febrero de 2025.

Asunto: Se Presenta Iniciativa de Reforma.

HONORABLE PLENO DE LA SEXAGÉSIMA PRIMERA
LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO
P R E S E N T E:

Quienes suscriben, **Diputada Claudia Díaz Gayou, Diputada Laura Andrea Tovar Saavedra, Diputada María Blanca Flor Benítez Estrada, Diputada Perla Patricia Flores Suárez, Diputada María Georgina Guzmán Álvarez, Diputada María Eugenia Margarito Vázquez, Diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos, Diputada Teresita Calzada Roviroso y Diputada Rosalba Vázquez Munguía** integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Querétaro, con fundamento en los artículos 18 fracción II, de la Constitución Política del Estado de Querétaro, 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Querétaro, someto a consideración de esta Representación Popular, la presente **«Iniciativa que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.»** Al tenor de los siguientes:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente reforma responde a la necesidad de armonizar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro con las disposiciones constitucionales y legales vigentes en materia de igualdad de género, garantizando la paridad en el ámbito legislativo.

Con estas modificaciones, se fortalece la institucionalización de la perspectiva de género en el Poder Judicial, asegurando que las decisiones, procesos y acciones reflejen el principio de equidad e inclusión en todos sus niveles.

El **8 de marzo**, Día Internacional de la Mujer, es una fecha emblemática que nos recuerda la lucha histórica por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. A lo largo del tiempo, se han logrado avances significativos en la construcción de sociedades más justas e incluyentes; sin embargo, persisten

Av. Fray Luis de León No. 2920.
Desarrollo Centro Sur. C.p. 76090.
Santiago de Querétaro, Qro.



brechas estructurales que limitan el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en distintos ámbitos, incluido el servicio público.

En este contexto, la reciente reforma constitucional en materia de **igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y erradicación de la brecha salarial** — publicada el 15 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación— establece un mandato claro para que las entidades federativas armonicen su marco normativo en un plazo de **180 días**.

El presente paquete de reformas a diversas leyes del Estado de Querétaro responde a esta obligación constitucional y atiende una demanda legítima de la sociedad: **consolidar un marco jurídico que garantice la paridad de género, elimine la discriminación salarial, refuerce los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género, e institucionalice la perspectiva de género en la administración pública.**

Las modificaciones propuestas buscan transformar la estructura y funcionamiento del gobierno estatal, así como de sus organismos autónomos y educativos, asegurando que las decisiones públicas se diseñen e implementen con equidad.

Con estas reformas, Querétaro reafirma su compromiso con la igualdad sustantiva y sienta las bases para una administración pública más justa, incluyente y libre de violencia de género, contribuyendo a la construcción de un futuro donde todas las personas tengan las mismas oportunidades de desarrollo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que el Estado Mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales que obligan al reconocimiento y garantía de los derechos humanos, particularmente los derechos de las mujeres, estableciendo compromisos que deben ser cumplidos por todos los niveles de gobierno. Entre estos instrumentos destaca la **Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)**, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Esta Convención es considerada la carta magna de los derechos de las mujeres a nivel internacional, ya que establece la obligación de los Estados Parte de eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, asegurando su acceso pleno y equitativo a oportunidades en todos los ámbitos de la vida pública y privada.



La CEDAW, en su **Artículo 2**, establece que los Estados Parte deben garantizar, mediante disposiciones legislativas, sanciones y medidas adecuadas, la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en sus sistemas jurídicos nacionales. Señalando lo siguiente:

«Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;*
- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;*
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;*
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;*
- e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;*
- f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;*





g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.»¹ (Sic.)

Asimismo, su **Artículo 7** exige a los Estados asegurar la participación plena y equitativa de las mujeres en la vida política y pública, garantizando su derecho a ser electas y designadas en puestos de toma de decisiones.

«Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas;

b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.»² (Sic.)

Por lo tanto, en el marco de la reforma constitucional en materia de **igualdad sustantiva, perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres**, es necesario armonizar la legislación local con estos compromisos internacionales, adoptando medidas que permitan la efectiva integración de las mujeres en espacios de poder y toma de decisiones, asegurando que su participación no sea solo formal, sino real y efectiva.

SEGUNDO. Que, para vigilar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en la CEDAW, se creó el **Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer**, órgano encargado de monitorear el progreso de los Estados Parte y emitir recomendaciones para fortalecer el marco jurídico y político en

¹ Naciones Unidas, *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*, 1979. Disponible en <https://www.ohchr.org>.

² Naciones Unidas, *Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*, 1979. Disponible en <https://www.ohchr.org>.



favor de la igualdad de género. Este Comité ha emitido diversas **Recomendaciones Generales**, que constituyen criterios interpretativos fundamentales para la aplicación efectiva de la Convención.

Entre estas, destaca la **Recomendación General No. 19**, que señala que la violencia de género es una forma de discriminación que impide el goce y ejercicio de los derechos y libertades de las mujeres en condiciones de igualdad, exigiendo a los Estados adoptar políticas públicas, marcos normativos y mecanismos institucionales para su prevención, sanción y erradicación.

«24. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que:

a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir los actos públicos o privados de violencia por razones de sexo.

b) Los Estados Partes velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la Convención.

[...]

t) Los Estados Partes adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para proteger eficazmente a las mujeres contra la violencia, entre ellas:

i) medidas jurídicas eficaces, como sanciones penales, recursos civiles e indemnización para protegerlas contra todo tipo de violencia, hasta la violencia y los malos tratos en la familia, la violencia sexual y el hostigamiento en el lugar de trabajo;

ii) medidas preventivas, entre ellas programas de información y educación para modificar las actitudes relativas al papel y la condición del hombre y de la mujer;



iii) medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.»³ (Sic.)

Posteriormente, la **Recomendación General No. 35**, emitida en 2017, amplió este concepto y enfatizó la necesidad de establecer mecanismos multisectoriales, con la participación de todos los niveles de gobierno, para garantizar la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.

«IV Recomendaciones

27. Sobre la base de la recomendación general núm. 19 y de la labor del Comité desde su aprobación, el Comité insta a los Estados partes a que refuercen la aplicación de sus obligaciones en relación con la violencia por razón de género contra la mujer, ya sea dentro de su territorio o extraterritorialmente. El Comité reitera su llamamiento a los Estados partes para que ratifiquen el Protocolo Facultativo de la Convención y examinen todas las reservas restantes a la Convención con miras a retirarlas.

28. El Comité también recomienda que los Estados partes adopten las siguientes medidas en las esferas de la prevención, la protección, el enjuiciamiento y el castigo, la reparación, la recopilación y supervisión de los datos y la cooperación internacional a fin de acelerar la eliminación de la violencia por razón de género contra la mujer. Todas las medidas deberían aplicarse con un enfoque centrado en la víctima o superviviente, reconociendo a las mujeres como titulares de derechos y promoviendo su capacidad para actuar y su autonomía, en particular la evolución de la capacidad de las niñas, desde la infancia hasta la adolescencia. Además, las medidas deberían concebirse y aplicarse con la participación de la mujer, teniendo en cuenta la situación particular de las mujeres afectadas por las formas interrelacionadas de discriminación.

29. El Comité recomienda que los Estados partes apliquen las siguientes medidas legislativas:

a) Velar por que todas las formas de violencia por razón de género contra la mujer en todas las esferas que constituyan una violación de su integridad física, sexual o psicológica se tipifiquen como delito e introducir, sin demora,

³ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General N.º 19: La violencia contra la mujer, 11º período de sesiones, 1992. Disponible en <https://www.ohchr.org>.



o reforzar, sanciones legales proporcionales a la gravedad del delito, así como recursos civiles.

b) Velar por que todos los sistemas jurídicos, en particular los sistemas jurídicos plurales, protejan a las víctimas y supervivientes de la violencia por razón de género contra la mujer y velar por que tengan acceso a la justicia y a una reparación efectiva, de conformidad con las orientaciones que ofrece la recomendación general núm. 33;

[...]

d) Examinar las leyes y políticas neutrales en cuanto al género para asegurarse de que no crean o perpetúan las desigualdades existentes y derogarlas o modificarlas si lo hacen.»⁴ (Sic.)

Asimismo, el Comité ha exhortado a los Estados a garantizar la **paridad de género en el acceso a los puestos de decisión política, administrativa y judicial**, estableciendo medidas concretas que permitan la eliminación de barreras estructurales que históricamente han limitado la participación de las mujeres en estos espacios.

En este sentido, la presente reforma busca consolidar la igualdad sustantiva en la administración pública del Estado de Querétaro, asegurando que la paridad de género en la designación de titulares de dependencias y organismos públicos no sea solo una aspiración, sino una realidad jurídicamente garantizada, en cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado Mexicano.

TERCERO. Que, dentro del marco jurídico interamericano, la **Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará)**, adoptada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1994 y ratificada por México en 1998, establece de manera explícita el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En su **Artículo 1**, define la violencia contra la mujer como:

«Artículo 1.

⁴ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, *Recomendación General N.º 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General N.º 19, 2017.* Disponible en <https://www.ohchr.org>.



Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.»⁵ (Sic.)

Dicha Convención, en su **Artículo 7**, establece la obligación de los Estados Parte de adoptar, sin dilaciones, medidas legislativas y administrativas que permitan la erradicación de la violencia de género, incluyendo la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad y protección de las mujeres en todos los ámbitos de su vida.

«Artículo 7.

Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

- a) Abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación;*
- b) Actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer;*
- c) Incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso;*
- d) Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atenté contra su integridad o perjudique su propiedad;*

⁵ Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), adoptada el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. Disponible en <https://www.oas.org>.



e) Tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer;

[...]

h) Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.»⁶ (Sic.)

En este sentido, el presente proyecto de reforma tiene como finalidad fortalecer el marco normativo en materia de seguridad pública en el Estado de Querétaro, incorporando la **perspectiva de género en el diseño, implementación y evaluación de las políticas y programas de seguridad**. Específicamente, se busca garantizar que las estrategias de prevención del delito incluyan medidas focalizadas para la protección de las mujeres, niñas, niños y otros grupos en situación de vulnerabilidad, estableciendo protocolos especializados que permitan su atención y protección.

CUARTO. Que el **Convenio sobre Discriminación en el Empleo y la Ocupación (Convenio No. 111 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT)**, ratificado por México, establece que los Estados deben adoptar políticas y normativas que garanticen la **igualdad de oportunidades y trato en el empleo**, eliminando cualquier tipo de discriminación basada en el género. Este convenio reconoce que la igualdad sustantiva en el ámbito laboral es fundamental para garantizar el desarrollo económico y social de las naciones.

«Artículo 3.

Todo Miembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga, por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales, a:

[...]

b) Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política;

⁶ Organización de los Estados Americanos (OEA), Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belém do Pará"), adoptada el 9 de junio de 1994 en Belém do Pará, Brasil. Disponible en <https://www.oas.org>.



c) Derojar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones o prácticas administrativas que sean incompatibles con dicha política.»⁷ (Sic.)

El Estado Mexicano ha dado pasos importantes en el reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral, incorporando en la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos** diversas disposiciones orientadas a erradicar la discriminación en el acceso al empleo, así como la garantía de condiciones equitativas en términos de remuneración y desarrollo profesional.

En este contexto, la presente reforma busca fortalecer los mecanismos de control y supervisión en materia de **equidad salarial y condiciones laborales dentro del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro**, estableciendo como atribución de la Secretaría de la Contraloría la vigilancia y evaluación de la aplicación de protocolos para la prevención del acoso laboral y la eliminación de las brechas salariales por razones de género.

QUINTO. Que, en el ámbito nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su **Artículo 1°** el principio de **igualdad y no discriminación**, señalando que:

«Artículo 1.-

[...]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.»⁸ (Sic.)

Asimismo, el **Artículo 4° constitucional** establece la igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo el derecho de todas las personas a la **protección de la salud, al acceso a una vivienda digna, a un ambiente sano y al bienestar social**. Este marco constitucional ha sido complementado con diversas reformas legislativas en materia de paridad de género, igualdad sustantiva y derechos humanos, con el objetivo

⁷ Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio N.º 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, adoptado el 25 de junio de 1958 en la 42ª reunión de la Conferencia General de la OIT. Disponible en <https://www.ilo.org>.

⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, con última reforma publicada el 17 de enero de 2025. Disponible en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>.



de fortalecer el papel de las mujeres en la vida pública, garantizar su acceso a espacios de toma de decisiones y prevenir cualquier tipo de violencia o discriminación. Señalando que:

«Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de las familias. El Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres.»⁹ (Sic.)

En este sentido, el **presente proyecto de reforma** reafirma el compromiso del Estado de Querétaro con la **igualdad sustantiva** y la **paridad de género** en la administración pública, estableciendo disposiciones específicas para garantizar que la integración de los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo respete el principio de paridad de género y que las políticas públicas incorporen una perspectiva transversal de derechos humanos e igualdad.

SEXTO. Que la reciente reforma constitucional en materia de **igualdad sustantiva, perspectiva de género y erradicación de la violencia contra las mujeres** publicada el 15 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, establece la obligación de armonizar las leyes estatales para garantizar la **paridad de género en la integración de los Poderes del Estado, organismos autónomos y administración pública estatal y municipal.**

SÉPTIMO. Que la administración e impartición de justicia en el Estado de Querétaro debe garantizar un servicio eficiente, accesible y con perspectiva de derechos humanos. En este sentido, la presente reforma tiene como propósito fortalecer la estructura organizacional del Poder Judicial mediante la adecuación de sus áreas de apoyo y control, asegurando que respondan a las necesidades actuales de la sociedad y a los compromisos internacionales en materia de igualdad de género.

Para ello, se reforma el **Artículo 151** de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, a fin de garantizar que las áreas de apoyo jurisdiccional cuenten con un marco normativo que refleje la realidad operativa del sistema judicial y mejore su funcionalidad. La inclusión de principios de equidad y eficiencia en la conformación de la **Oficialía de Partes, la Oficina Central de Consignaciones, la Dirección de Orientación y Servicio a la Ciudadanía, la Coordinación de Actuarios, la Coordinación de Peritos y Auxiliares de la Administración de Justicia, la Dirección de Psicología y el Centro de Justicia Alternativa**

⁹ *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, con última reforma publicada el 17 de enero de 2025. Disponible en <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>.*



busca optimizar el desempeño de cada una de estas instancias, asegurando un acceso efectivo a la justicia para toda la población.

De igual forma, esta adecuación responde al imperativo de consolidar un Poder Judicial más moderno, capaz de responder con prontitud y eficacia a los desafíos que plantea la impartición de justicia en un contexto de creciente demanda ciudadana y transformación social. En este sentido, la reforma pretende garantizar que las estructuras administrativas del Poder Judicial se mantengan alineadas con las mejores prácticas en materia de organización, gestión y operación, asegurando que cada área cumpla con sus funciones de manera efectiva y con los recursos adecuados.

OCTAVO. Que la reforma a los **artículos 164 y 190** de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro tiene como objetivo garantizar la paridad de género en la designación de los titulares de las áreas administrativas y órganos de control, asegurando que el principio de igualdad sustantiva sea una realidad en la integración de los cargos de alto nivel dentro del Poder Judicial.

En concordancia con lo dispuesto en el **Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que establece la obligación del Estado de garantizar la paridad de género en la conformación de los órganos gubernamentales, esta reforma asegura que los nombramientos dentro del Poder Judicial se realicen bajo un esquema de equidad. Esto implica que el acceso a los cargos directivos de las áreas administrativas, de control interno y de supervisión no esté condicionado por razones de género y que, en su proceso de designación, se promueva la erradicación de cualquier forma de discriminación estructural que limite la participación de las mujeres en la toma de decisiones.

En virtud de ello, el **Artículo 164** establece que las áreas administrativas del Poder Judicial deberán operar bajo el principio de paridad de género, lo que implica que su conformación deberá reflejar la equidad en la designación de sus titulares. De igual manera, el **Artículo 190** refuerza esta disposición en el caso del Órgano Interno de Control del Poder Judicial, incorporando mecanismos de supervisión y vigilancia que permitan identificar y corregir cualquier práctica discriminatoria en los procesos de selección y promoción del personal.

NOVENO. Que el **8 de marzo de 2024**, conmemoración del **Día Internacional de la Mujer**, marcó un momento de reflexión sobre los avances y desafíos en materia de derechos de las mujeres. En este contexto, resulta fundamental impulsar reformas legislativas que traduzcan los compromisos en acciones concretas que garanticen la igualdad sustantiva, la erradicación de la violencia de género y el acceso equitativo a espacios de decisión pública.



DÉCIMO. Que la presente reforma también contempla un **plazo específico para la adecuación de las disposiciones normativas derivadas de la reforma constitucional**, con el propósito de garantizar su aplicación efectiva y su armonización con el marco legal vigente.

Plazo de **180 días naturales** para que los Estados de la República adecúen sus respectivas leyes y reglamentos a fin de garantizar la paridad de género en la administración pública. **Por lo tanto, es imperativo que el Estado de Querétaro realice las modificaciones necesarias dentro del periodo establecido, en cumplimiento de lo dispuesto en la Carta Magna**

En congruencia con los principios de **seguridad jurídica, legalidad y certeza normativa**, se establece que se deberán realizar las modificaciones necesarias en su estructura y normatividad interna dentro del plazo mencionado. Este plazo permitirá a las instancias gubernamentales implementar los cambios administrativos y organizacionales requeridos para garantizar el cumplimiento de los nuevos preceptos en materia de **paridad de género, igualdad sustantiva, equidad salarial y prevención de la violencia de género**.

DÉCIMO PRIMERO. Que el principio de **transversalidad de género**, reconocido en la legislación mexicana, obliga a todas las dependencias gubernamentales a adoptar enfoques que incorporen la perspectiva de género en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.

DÉCIMO SEGUNDO. Que la administración pública estatal debe consolidarse como un espacio libre de discriminación, donde las mujeres y los hombres tengan las mismas oportunidades de acceso, permanencia y desarrollo en el servicio público, contribuyendo al fortalecimiento del estado de derecho y a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

DÉCIMO TERCERO. La incorporación de **conceptos como igualdad sustantiva y perspectiva de género constituye un mandato** para que las autoridades en todos los niveles de gobierno implementen acciones afirmativas y ajusten su marco normativo y políticas públicas conforme a estos principios. Aunque la normativa ya reconocía la igualdad entre los ciudadanos, **esta actualización enfatiza la relevancia de dichos principios, con el objetivo de promover el desarrollo profesional y garantizar una protección efectiva para las mujeres**, al ser consideradas por el legislador como un grupo en situación de vulnerabilidad.

DÉCIMO CUARTO. Que, por lo anteriormente expuesto, resulta procedente y necesario reformar la **Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro** para garantizar el pleno ejercicio de los derechos



humanos de las mujeres, promoviendo un marco normativo acorde con los compromisos internacionales y nacionales en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del Pleno de la LXI Legislatura del Estado, la presente Iniciativa:

INICIATIVA

INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Artículo Único Se reforma el Artículo 2, 31 y se adiciona un párrafo a el Artículo 151, 164 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro, para quedar como sigue:

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Querétaro.

Título Primero

Generalidades

Capítulo I

Disposiciones Iniciales

Artículo 2. Es objeto de esta Ley, regular la organización, funcionamiento y atribuciones del Poder Judicial del Estado de Querétaro **garantizando la paridad de género y respeto a los derechos humanos**, a quien corresponde interpretar y aplicar las leyes en asuntos jurisdiccionales del orden civil, familiar, penal, para adolescentes, ejecución de sanciones penales, laboral y constitucional del fuero común, así como en materia federal cuando las leyes conducentes lo faculten.

Capítulo V

Poder Judicial Abierto

Artículo 31. La función del Poder Judicial, se basa en los principios rectores de la justicia abierta, que se manifiesta en la transparencia, participación cívica y rendición de cuentas, **así como por la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos** con el fin de garantizar el Estado de Derecho.



...

Sección Quinta
Áreas de Apoyo a la Función Jurisdiccional

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 151. ...

I. al VII. ...

...

...

...

La designación de los titulares de las áreas de apoyo a la función jurisdiccional deberá garantizar que la composición de los mismos sea conforme al principio de paridad de género, promoviendo la equidad en la asignación de cargos y la erradicación de cualquier forma de discriminación.

Sección Sexta
Áreas Administrativas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 164. ...

...

I. al IX. ...

...

...





...
...

La designación de los titulares de estas áreas administrativas deberá observar el principio de paridad de género, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos y fomentando una administración pública incluyente y equitativa.

TRANSITORIOS

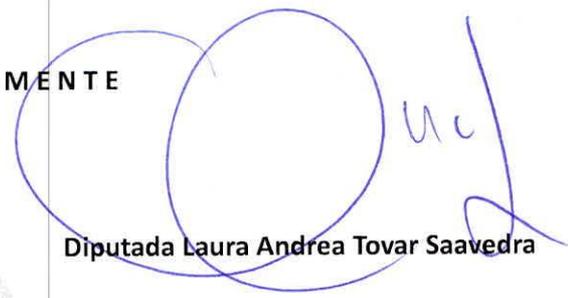
PRIMERO. La presente entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga".

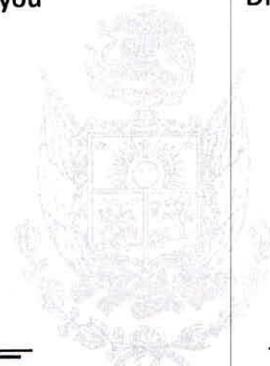
SEGUNDO. Las autoridades competentes del Poder Judicial deberán realizar las adecuaciones normativas y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento del principio de paridad de género en la designación de los titulares de las áreas señaladas en esta reforma.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones normativas de igual o menor jerarquía, que se opongan a los establecido en la presente Ley.

ATENTAMENTE


Diputada Claudia Díaz Gayou


Diputada Laura Andrea Tovar Saavedra





LXI
— LEGISLATURA —
QUERÉTARO

Diputada María Blanca Flor Benítez Estrada

Diputada María Eugenia Margarito Vázquez

Diputada Teresita Calzada Roviroso

Diputada Rosalba Vázquez Munguía

Diputada Perla Patricia Flores Suárez

Diputada María Georgina Guzmán Álvarez

Diputada Sully Yanira Mauricio Sixtos

(HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO.)

Ccp. Archivo



Av. Fray Luis de León No. 2920.
Desarrollo Centro Sur. C.p. 76090.
Santiago de Querétaro, Qro.